



**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN  
SALA LABORAL**

Abril veintinueve (29) de dos mil veintiuno (2021)

Radicado: 05001-31-05-012-2018-00031-01  
Demandantes: LUZ MIRIAM ESCOBAR ÁLVAREZ  
Demandado: COLPENSIONES  
Tema: PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE

La Sala Sexta de decisión, presidida por el magistrado ponente DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN, e integrada por las magistradas MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA y ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, procede a emitir sentencia dentro del proceso de referencia; decisión que se emite en forma escrita atendiendo a las disposiciones del artículo 15 del Decreto Legislativo 806 de 2020.

Acreditados los presupuestos procesales y sin que se evidencien causales de nulidad que invaliden lo actuado, se procede a emitir la presente decisión.

Atendiendo al contenido de la escritura pública 3377 de septiembre 2 de 2019 suscrita ante el Notario 9 de Bogotá, por la Cual la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones- otorga poder a la sociedad RST ASOCIADOS PROJECTS S.A.S. para ejercer la defensa judicial de la entidad, se le reconoce personería adjetiva al Dr. RICHARD GIOVANNY SUÁREZ TORRES, quien a su vez sustituye el poder al Dr. JUAN ESTEBAN ZAPATA, quedando así el doctor Zapata investido de todas las facultades que confirió la entidad poderdante.

**ANTECEDENTES**

Pretende la demandante el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, junto con sus intereses de mora, causada con ocasión al fallecimiento de quien fue su cónyuge, JORGE IVÁN CARO ROLDÁN, acaecida el 4 de marzo de 2016.

Pretensiones que fueron negadas por el A quo, tras indicar que el afiliado no satisfizo la densidad de cotización que establece el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificada por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, en tanto no acumuló las 50 semanas dentro de los 3 años previos al fallecimiento, sin que fuera posible contabilizar las cotizaciones por los empleadores Asescont K y L y José Ramón Jiménez, en tanto fueron aportados en fecha posterior al fallecimiento del afiliado, aunado a que no se demostró que estos empleadores hubieran realizado afiliación en momento previo, a efectos de concluir que estaba en cabeza de la administradora de pensiones realizar los cobros de los aportes en mora.

Inconforme con la decisión fue recurrida por la activa quien insiste en la procedencia de la prestación al hallarse satisfechos los presupuestos de causación, en particular, la densidad de cotización para la cual deben acumularse los aportes con pagos extemporáneos de los empleadores, retraso que no puede imputarse al trabajador o sus beneficiarios, siendo obligación de la administradora de pensiones realizar los cobros coactivos.

### **ALEGATOS**

Dentro del término de traslado que trata el decreto 806 de 2020, la apoderada de la demandante reiteró su posición respecto a la causación de la pensión de sobrevivientes, estando satisfecho el requisito de densidad de cotización, siendo válidas las cotizaciones realizadas por los empleadores, pese a que fueron posteriores al deceso del trabajador, pero que se generaron en virtud de una auténtica relación laboral, lo que se deduce de las cotizaciones al sistema en salud.

A su vez, la parte accionada indicó que debe confirmarse la decisión de primera instancia, por la cual se negó la prestación, en tanto el afiliado Caro Roldán, falleció el día 4 de marzo de 2016, acumuló 43.15 semanas cotizadas dentro de los últimos

tres años anteriores a su fallecimiento, sin que sea posible contabilizar pagos realizados con posterioridad al deceso.

### **CONSIDERACIONES DE INSTANCIA**

Previo a resolver la impugnación, importa poner de presente que, a partir de las pruebas aportadas al proceso en esta instancia se encuentran por fuera de discusión los siguientes elementos fácticos: **1)** Que la demandante y Jorge Iván Caro Roldán contrajeron matrimonio el 25 de julio de 1981 (fl. 18); **2)** Que el 4 de marzo de 2016 falleció el afiliado Jorge Iván Caro (fls 19); **3)** Que el 31 de mayo de 2016 Luz Miriam Escobar Álvarez solicitó a Colpensiones el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, petición que fue negada tras indicar que el afiliado no satisfizo la densidad de cotización necesaria, por cuanto pese a acumular 488 semanas en su vida laboral, en los 3 años previos al deceso reporta 43.15 semanas (resolución GNR 218220 de 2016 - fls20/23) y **4)** que con resoluciones SUB 130101 de 2017 y DIR 12686 de 2017 Colpensiones resolvió los recursos de reposición y apelación a la decisión de negación del derecho. En estas explicó que las cotizaciones de los ciclos de 2013 a 2014 reportados por el empleador ASESCONT K y L fueron cancelados el 27 de abril de 2016. Al igual que los ciclos 2015/07 a 2015/09 fueron pagados por el empleador López Jiménez José Ramos el 23 de marzo de 2016, ambos posteriores al deceso del afiliado (fls. 37/44).

En este orden de ideas y en virtud del principio de congruencia, le corresponde a esta Corporación determinar si hay lugar al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, por muerte del afiliado Jorge Iván Caro Roldán, previo análisis de la densidad de cotización acumulada por éste, en particular si han de tenerse como válidas las cotizaciones pagadas con posterioridad a su deceso.

Pues bien, dada la a fecha del fallecimiento de Jorge Iván Caro Roldán, el 4 de marzo de 2016 la norma que regula la prestación es el artículo 46 de la Ley 100 de

1993, modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que exige un mínimo de 50 semanas en los 3 años anteriores al deceso.

Respecto a la contabilización del cúmulo de cotizaciones, valga indicar que conforme al literal L del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 2 de la Ley 797 de 2003 el reconocimiento de las prestaciones del sistema general de pensiones tiene como sustrato las cotizaciones efectivamente realizadas y el tiempo de servicios ciertamente prestados antes del reconocimiento de la pensión. Y bajo esta premisa indica: “...*Tampoco podrán otorgarse pensiones del Sistema General que no correspondan a tiempos de servicios efectivamente prestados o cotizados, de conformidad con lo previsto en la presente ley*”.

Premisa que ha de complementarse con lo establecido en los artículos 22 y 23 de la misma normativa, según los cuales, dentro de una relación laboral subordinada, el empleador es responsable del pago de las cotizaciones, para los cual debe descontar del salario del trabajador la porción que a este le corresponde cubrir, para que junto con su aporte patronal y dentro de las fechas establecidas para los pagos, traslade los recursos a la administradora de pensiones, so pena de responder por la totalidad de la cotización y sus intereses, aun en el evento en que no realice los descuentos al trabajador.

Y siendo el recaudo de prestaciones una labor que resulta de vital importancia para la financiación de las prestaciones que reconoce el sistema pensional, para asegurar su cumplimiento se dota a las administradoras de pensiones de amplias facultades de vigilancia, control y aun de cobro coactivo, ya que tras escasos lapsos de mora y previo básicos requerimientos de pago, las AFP están autorizadas para elaborar la liquidación de la deuda, misma que presta mérito ejecutivo y las habilita para acudir a las vías judiciales para hacer efectivo el crédito en su favor, y que repercute en el derecho del afiliado y sus eventuales beneficiarios (artículo 24 Ley 100 de 1993)

La anterior aserción genera unas consecuencias relativas a la satisfacción de los presupuestos de causación de las pensiones, en tanto para el trabajador dependiente el hecho generador de las cotizaciones al sistema pensional es la efectiva prestación del servicio, quedando en cabeza del empleador y de la administradora, los trámites de pago y eficiente recaudo de los aportes, sin que el obrar negligente u omiso de estos dos últimos agentes afecten los derechos del trabajador o los de sus causahabientes (al respecto las sentencias CSJ SL 3807 de 2020, CSJ SL1363-2018, entre otras)

La anterior distribución de responsabilidades se sintetiza en la posición adoptada por la Sala de Casación Laboral de la CSJ que prevé que, por la mora del empleador en el pago de los aportes resulta menester verificar si la administradora de pensiones cumplió con el deber específico del cobro, aunado a la comprobación de la existencia de un vínculo laboral, bien sea regido por un contrato de trabajo o una relación legal y reglamentaria, ya que la mora del empleador tiene como sustento una relación de trabajo real, demostración de esta última que no se encuentra sujeta a tarifa probatoria, ya que el funcionario judicial en ejercicio de la libertad de apreciación probatoria y de formación del convencimiento, llegará a tal intelección a través de las pruebas que válida y oportunamente sean adosadas al trámite procesal. (al respecto la sentencia CSJ SL 778 de 2021).

Con las anteriores premisas se descende al caso concreto, hallando a folios 63/64 la historia laboral del afiliado Caro Roldán, que reporta 488 semanas cotizadas entre el 25 de abril de 1973 al 3 de abril de 2016, en la misma aparecen algunas inconsistencias en los ciclos de enero y febrero de 1996; diciembre de 2013 a abril de 2014 y julio a septiembre de 2015.

Relativo a los ciclos de enero de 1996 pese a que se señala como días cotizados “30” solo se contabiliza 10 días dejando la reseña “pago aplicado al periodo declarado”. Para el siguiente ciclo, también se reportan 30 días, pero no se acumula

ninguno tras indicar “pago aplicado a periodos anteriores”. Inconsistencias que no presenta justificación alguna, pues además que tales cotizaciones hacen parte de una secuencia de pagos a través del empleador Gildardo Ramírez y CIA, que inició en mayo de 1994, las fechas de pago no refleja una mora o retraso, en tanto fueron cancelados en los primeros días del mes inmediatamente siguiente, lo que permite acumular a la densidad de cotización **5.71 semanas**.

En cuanto a los ciclos de diciembre de 2013 a abril de 2014, en los que reportan 122 días (**17.42 semanas**) pero no se acumula semana alguna, se deja la anotación de “no registra relación laboral en afiliación con este pago”, ciclos que fueron cancelados de forma conjunta el 27 de abril de 2016 a través del empleador ASESCONT K y L, pagando el valor de los ciclos y los intereses por los días de mora (fl. 36 y 48 a 51)

Relativo al vínculo laboral que soporta tal pago, a folio 46 reposa el certificado fechado del 7 de julio de 2017 e indica: *“...Jorge Iván Caro Roldán con CC 11787002 laboro (sic) con nuestra empresa desde el 01 de diciembre de 2013 hasta el 2 de mayo de 2014”*

Igual situación se verifica con los aportes de los ciclos de julio a septiembre de 2015 (**83 días ó 11.85 semanas**) pagados por el empleador José Ramón López Jiménez el 23 de marzo de 2016, detallando la novedad de ingreso, cancelando el valor del ciclo y sus intereses.

También se adosó un documento fechado de julio 7 de 2017 e indica *“por medio de la presente la empresa JOSÉ RAMÓN LÓPEZ JIMÉNEZ con NIT 717000538 hace constar que el señor JORGE IVAN CARO ROLDAN con CC 11787002 presto (sic) los servicios con contrato laboral como conductor desde el 8 de julio de 2015 hasta el 4 de febrero de 2016” (fl. 47).*

En adición, se aportó el documento “certificado de pago” de Coomeva EPS que refleja los pagos al sistema de salud para el señor Caro Roldán a través del empleador ASESCONT K y L desde enero de 2013 a mayo de 2014 y por el empleador José Ramón López Jiménez entre agosto de 2015 a marzo de 2016 (fls. 61/62)

Por su parte, Colpensiones en resoluciones SUB 104736 de 2017, SUB 130101 de 2017 y DIR 12686 de 2017 (30/44) al resolver los diferentes recursos contra la decisión que negó el derecho pensional, expuso que no era posible reconocer los ciclos pagados por el empleador José Ramón López Jiménez y ASESCONT K y L toda vez que fueron pagados extemporáneamente, en fecha posterior a la muerte del afiliado, además que los mismos no presentan como antecedente una afiliación por los empleadores.

Son estas las pruebas aportadas al proceso, con las mismas logra establecerse que Jorge Iván Caro Roldán estuvo vinculado laboralmente con los empleadores José Ramón López Jiménez y Asescont K y L, empleadores que fueron negligentes en sus obligaciones de reporte y pago con el sistema pensional, ya que pese a formalizar una relación laboral, omitieron afiliar y pagar oportunamente las cotizaciones.

Reconoce la sala que Colpensiones no estaba en la capacidad de realizar un trámite de cobro por mora en las cotizaciones, ya que no existía una afiliación con los empleadores mencionados, sin embargo tal condición no impide que se consolide el derecho pensional, pues como se advirtió, el trabajador satisface su carga con la efectiva prestación del servicio, la que se encuentra plenamente acreditada y permite acumular las cotizaciones; quedando en cabeza de Colpensiones la posibilidad de adelantar los trámites de cobro por las sumas que aun se hallen insatisfechas para el cubrimiento total del ciclo adeudado y sus intereses, sin que tal trámite sea óbice o dilate el reconocimiento inmediato del derecho pensional.

Acumulados los ciclos de antes descritos se concluye que el afiliado Jorge Iván Caro acopió **523 semanas**, de las cuales **72.42 semanas** corresponden a los 3 años previos a su deceso, satisfaciendo el requisito establecido en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003.

En cuanto a los beneficiarios de la prestación, se presentó a juicio la señora Luz Miriam Escobar cónyuge del afiliado según el registro civil de matrimonio que da constancia del vínculo contraído el 25 de julio de 1981 (fl. 18).

En cuanto a las condiciones para el acceso a la pensión de sobrevivientes reclamada por el o la cónyuge o compañero (a) permanente del afiliado fallecido, la sala se remite a la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la CSJ según la cual se reconoce este beneficio a aquellos con quienes se conformó una comunidad de vida, permeada por la ayuda mutua, el acompañamiento espiritual que refleje el propósito de realizar un proyecto de vida de pareja responsable y estable, a la par de una convivencia real efectiva y afectiva, sin que sea necesario demostrar un tiempo mínimo, y que ha de tener en cuenta las circunstancias propias del núcleo familiar, a efectos de entender que no siempre las separaciones, desavenencias o estilos particulares de vida, impiden la consolidación del derecho (al respecto las sentencias CSJ SL 1399 de 2018, SL2232-2019, SL 3785 de 2020, entre otras).

En el presente evento, para demostrar tal condición fueron escuchadas Liliam Rocío Escobar Álvarez y María Victoria Torres Mesa, quienes se identificaron como hermanada y amiga de la accionante, respectivamente, testigos que de forma uniforme indicaron que Jorge Iván y Luz Miriam desde su matrimonio conformaron un hogar, que procrearon dos hijas ya mayores de edad; que Jorge Iván trabajaba como conductor y siempre veló por el sostenimiento del hogar, sin que la pareja presentara separaciones o sostuviera relaciones sentimentales paralelas, pues siempre estuvieron juntos, hasta el día del fallecimiento del señor Caro Roldán.



Dichos que resultan contundentes y suficientes para establecer el derecho pensional en favor de Luz Miriam Escobar Álvarez, prestación que se causa en cuantía equivalente a 1 SMLMV ya que al conjugar los SBC y aplicarle una tasa del 45% (artículo 48 Ley 100 de 1993) no se obtiene una suma superior. Reconocimiento a razón de 13 mesadas anuales, a partir del 5 de marzo de 2016, cuyo retroactivo calculado al 31 de marzo de 2021 asciende a **CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS (\$52´136.462)**, monto del cual se autoriza realizar los descuentos con destino al sistema de seguridad social en salud.

AÑO	Valor Mesada	Nº mesadas	Sub total
2016	\$ 689.454	10,8	\$ 7.487.47
2017	\$ 737.717	1	\$ 9.590.32
2018	\$ 781.242	1	\$ 10.156.14
2019	\$ 828.116	1	\$ 10.765.50
2020	\$ 877.803	1	\$ 11.411.43
2021	\$ 908.526		\$ 2.725.57
TOTAL			\$ 52.136.46

Retroactivo pensional que no se encuentra afectado por la prescripción extintiva contemplada en los artículos 151 del CPTSS y 488 del CST, ya que entre la fecha de causación del derecho (5 de marzo de 2016) y la reclamación administrativa del derecho el 31 de mayo del 2016 no transcurrió un lapso superior a 3 años, como tampoco entre la data que se resolvió el recurso de apelación a través de resolución VPB 37796 de 2016 (fl. 24/28) y la presentación de la acción judicial el 23 de enero de 2018.

A partir del 1º de abril de 2021, la accionada seguirá reconociendo la prestación a la accionante en cuantía de 1 SMLMV a razón de 13 mesadas anuales.

Relativo a los intereses de mora de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, considera la corporación que no hay lugar a imponerlos, toda vez que conforme al artículo 1º de la Ley 717 de 2001, la solicitud de derecho pensional ha de acompañarse con la correspondiente documentación que acredite su derecho, premisa que no se cumplió en el presente evento, en tanto conforme a lo enunciado

por la resolución GNR 218220 de 2016 (fl. 20) a la petición inicial no se adosó documento alguno que demostrara ni explicara la existencia de las cotizaciones realizadas extemporáneamente, condición necesaria para evaluar el derecho pensional y que solo fue esclarecida a través de este trámite judicial.

En subsidio y para resarcir los efectos nocivos de la pérdida del poder adquisitivo por la demora en el pago de la prestación, se impone a la accionada indexar las mesadas adeudadas, aplicando a cada una la variación del IPC vigente al momento de satisfacción de la condena.

Resta por indicar que, atendiendo a las directrices del artículo 365 del CGP se imponen costas en ambas instancias a la parte vencida en el proceso. En primera instancia se reducen en un 30% dada la absolución de la pretensión de intereses de mora. En esta instancia se tasan las agencias en derecho en 1 SMLMV.

En los términos expuestos quedan resueltos los aspectos objeto de apelación.

En mérito de lo expuesto, la **SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, **REVOCA DE FORMA TOTAL** la sentencia impugnada, en su lugar declara que el afiliado Jorge Iván Caro Roldán dejó causada la pensión de sobrevivientes, de la que es beneficiaria su esposa LUZ MIRIAM ESCOBAR ÁLVAREZ. Calculado el retroactivo pensional causado entre el 5 de marzo de 2016 y el 31 de marzo de 2021 asciende a **CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS (\$52'136.462)**, monto que será reconocido con la debida indexación y del cual se autoriza realizar los descuentos con destino al sistema de seguridad social en salud

A partir del 1° de abril de 2021 la accionada seguirá reconociendo la mesada pensional en cuantía de 1 SMLMV a razón de 13 mesadas anuales.

Se declara próspera la excepción de improcedencia de intereses de mora e impróspera la de prescripción.

Costas en ambas instancias a la parte vencida en el proceso, reducidas en un 30% dadas la absolución de una de las pretensiones. En esta instancia se tasan las agencias en derecho en 1 SMLMV.

Lo resuelto se notifica a las partes por estados. Se ordena la devolución del expediente al Juzgado de origen.

Los Magistrados,

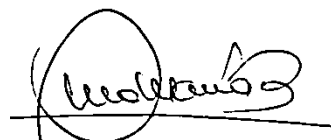


**DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN**



**MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA**

*Con aclaración de voto*



**ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ**

*Con aclaración de voto*

CERTIFICO: Que la anterior providencia fue notificada a  
Estados N° 73 publicados por medios digitales el 30 de ABRIL de  
2021



## **SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL**

Medellín, 29 de abril marzo de 2021

Las Suscritas Magistradas, integrantes de la Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, con el acostumbrado respeto, nos permitimos ACLARAR el voto parcialmente a la sentencia proferida en el proceso ordinario laboral de doble instancia promovido por LUZ MIRIAM ESCOBAR ÁLVAREZ contra COLPENSIONES radicado 05001-31-05-012-2018-0031-01 con ponencia del Magistrado Diego Fernando Salas Rondón, en los siguientes términos:

Se discute en el subjudice, la pertinencia y legalidad de la satisfacción de cotizaciones con intereses por los periodos de afiliación a la seguridad omitidos por los empleadores Asescont K y L y José Ramón Jiménez en favor del señor JORGE IVÁN CARO ROLDÁN del periodo comprendido entre diciembre de 2013 a abril de 2014 reportados por el primero, y de julio a septiembre de 2015 pagados el 23 de marzo de 2016 con posterioridad a la muerte del asegurado, con el fin de contabilizarlos válidamente dentro de la densidad de semanas exigidas en el art. para dejar causada la prestación en favor de sus sobrevivientes.

Debe señalarse al respecto, que existe una consolidada y uniforme jurisprudencia de la SCL de la H. CSJ. en el caso específico de las pensiones de sobrevivientes, en la que ha sentado que la subrogación del riesgo pensional por parte de las AFP por la vía de la convalidación de tiempos servidos y no cotizados a través de cálculo actuarial, solo resulta admisible si tal procedimiento se realiza en su integridad antes de que ocurra la muerte. Se concluye así que, si el empleador omiso en la afiliación no realiza la convalidación de tiempos servidos antes de la contingencia, debe asumir el pago de la pensión de sobrevivientes reclamada, en aplicación de disposiciones como el artículo 8 del Decreto 1642 de 1995 y sentencias de esta Sala como la CSJ SL, 9 sep. 2009, rad. 35211.

Sin embargo, no sucede lo mismo en la interpretación que al respecto hace la Corte Constitucional, en algunos casos referidos a pensión de invalidez y de

sobrevivientes. En efecto, en la **Sentencia T-429/18** se analiza un caso en el que por vía ordinaria en primera instancia, a la accionante en la reclamación administrativa se le niega el reconocimiento de la pensión de sobreviviente como consecuencia del fallecimiento de su cónyuge por no contar con la cotización de semanas requeridas, pero, en segunda instancia y por vía de tutela pese a referir a las reglas sentadas por la primera de esas corporaciones, termina aceptando la validez del pago de cálculo actuarial en la totalidad de riesgos, en pro de garantizar derechos fundamentales de los reclamantes de estas prestaciones económicas.

En esa oportunidad la Corte Constitucional se pronunció basado en que:

*(..) Donaldo Victoria, esposo de la tutelante, falleció el 01 de octubre de 1996, estando vigente la Ley 100 de 1993, en la cual se exigían como requisitos para la pensión de sobrevivientes que, si el afiliado se encontraba activo, hubiese cotizado al sistema por lo menos 26 semanas al momento de la muerte o que, habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiera efectuado aportes durante, por lo menos, 26 semanas en el año inmediatamente anterior a la muerte. Requisitos que, en principio, no cumplía el cotizante en tanto que no estaba activo y no tenía semanas cotizadas en el año anterior a su fallecimiento. La historia laboral del señor Donaldo Victoria, actualizada a agosto 28 de 2018, muestra un total de 259 semanas cotizadas, las cuales corresponden al periodo comprendido entre el 01 de enero de 1967 y el 24 de diciembre de 1971, con lo que, en principio, el causante pareciera tampoco cumplir con lo requerido en el Acuerdo 049 de 1990.*

*(...)*

*No obstante, el Ingenio San Carlos S.A.<sup>1</sup> presenta otra constancia laboral en la que se afirma que el cotizante fallecido **laboró para esa empresa desde el 10 de agosto de 1964 hasta el 24 de diciembre de 1971** por lo que las semanas reportadas, en una primera oportunidad, no se corresponden con la totalidad del tiempo laborado. Al respecto, esta Sala reitera que a partir de la Ley 90 de 1946, el empleador estaba en la obligación de aprovisionar los montos correspondientes para cubrir la pensión de sus trabajadores y, por lo tanto, es evidente que el incumplimiento de este deber por parte del Ingenio San Carlos S.A., resultó en la falta de semanas cotizadas en su historia laboral, lo que ha impedido que su esposa acceda a la referida pensión. en el proceso laboral ordinario ambas entidades fueron condenadas el 09 de junio de 2015 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali; el Ingenio San Carlos a efectuar los aportes al ISS correspondientes a Donaldo Victoria (Q.E.P.D.) por la totalidad del tiempo laborado para esa empresa; y el ISS, actualmente COLPENSIONES, a*

---

<sup>1</sup> Cuaderno 1 Folios 37 al 39.

*reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes a favor de la demandante, con base en el Acuerdo 049 de 1990.*

*(...)*

*La Corte Constitucional ha precisado que la interpretación más favorable para la protección del derecho a la seguridad social en pensiones del accionante, consiste en que el trabajador tiene derecho a que se tome en cuenta tiempo trabajado antes de la expedición de la Ley 100 de 1993 y que su empleador tiene la obligación de aprovisionar los cálculos actuariales en la suma correspondiente a su tiempo de servicios, tal como lo ordenaba la Ley 6ª de 1945 (sector público), la Ley 90 de 1946<sup>2</sup> (sector privado) y el Código Sustantivo del Trabajo<sup>3</sup>, mas no la Ley 100 de 1993, la cual estableció el mecanismo o medio para cumplir con el deber de aprovisionar.*

*(...) el afiliado había laborado para el Ingenio San Carlos S.A., desde el 10 de agosto de 1964 hasta el 24 de diciembre de 1971, por lo que las semanas de cotización que corresponderían al tiempo laborado superarían las 300 semanas requeridas en el marco de la aplicación de la condición más beneficiosa para el reconocimiento de dicha pensión.*

*(...) el juez natural encontró en ese proceso que la tutelante tiene derecho a que se le reconozca y pague la pensión de sobrevivientes causada por el fallecimiento de su esposo; y que la demora en el reconocimiento y pago de dicha pensión obedeció a la omisión de estas entidades y no a la negligencia de la accionante.*

---

<sup>2</sup> Ley 90 de 1946 (texto original). ARTÍCULO 2º. Serán asegurados por el régimen del seguro social obligatorio, todos los individuos, nacionales y extranjeros, que presten sus servicios a otra persona en virtud de un contrato expreso o presunto, de trabajo o aprendizaje, inclusive los trabajadores a domicilio y los del servicio doméstico. Sin embargo, los asegurados que tengan sesenta (60) años o más al inscribirse por primera vez en el seguro, no quedarán protegidos contra los riesgos de invalidez, vejez y muerte, ni habrá lugar a las respectivas cotizaciones. ARTICULO 72. Las prestaciones reglamentadas en esta ley, que venían causándose en virtud de disposiciones anteriores a cargo de los patronos, se seguirán rigiendo por tales disposiciones hasta la fecha en que el seguro social las vaya asumiendo por haberse cumplido el aporte previo señalado para cada caso. Desde esa fecha empezarán a hacerse efectivos los servicios aquí establecidos, y dejarán de aplicarse aquellas disposiciones anteriores.

(Corte Suprema de Justicia, Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia No. 70 del 9 de septiembre de 1982, Magistrado Ponente Dr. Ricardo Medina Moyano).

ARTICULO 76. El seguro de vejez a que se refiere la Sección Tercera de esta ley, reemplaza la pensión de jubilación que ha venido figurando en la legislación anterior. Para que el Instituto pueda asumir el riesgo de vejez en relación con servicios prestados con anterioridad a la presente ley, el patrono deberá aportar las cuotas proporcionales correspondientes. Las personas, entidades o empresas que de conformidad con la legislación anterior están obligadas a reconocer pensiones de jubilación a sus trabajadores, seguirán afectadas por esa obligación en los términos de tales normas, respecto de los empleados y obreros que hayan venido sirviéndoles, hasta que el Instituto convenga en subrogarlas en el pago de esas pensiones eventuales.

En ningún caso las condiciones del seguro de vejez para aquellos empleados y obreros que en el momento de la subrogación lleven a lo menos diez (10) años de trabajo al servicio de las personas, entidades o empresas que se trate de subrogar en dicho riesgo, serán menos favorables que las establecidas para ellos por la legislación sobre jubilación, anterior a la presente ley. (Corte Suprema de Justicia, Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia No. 70 del 9 de septiembre de 1982).

<sup>3</sup> Código Sustantivo del Trabajo. ARTICULO 259.

1. Los [empleadores] o empresas que se determinan en el presente Título deben pagar a los trabajadores, además de las prestaciones comunes, las especiales que aquí se establecen y conforme a la reglamentación de cada una de ellas en su respectivo capítulo.

2. Las pensiones de jubilación, el auxilio de invalidez y el seguro de vida colectivo obligatorio dejaran de estar a cargo de los [empleadores] cuando el riesgo correspondiente sea asumido por el Instituto de los Seguros Sociales, de acuerdo con la ley y dentro de los reglamentos que dicte el mismo Instituto.

*Si bien sobre dicha decisión se interpuso recurso de casación, el cual se encuentra pendiente de ser resuelto por la Corte Suprema de Justicia; lo expuesto por el ad quem en el proceso ordinario, evidencia la vulneración de los derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital y a una vida en condiciones dignas de la demandante, llevándola a depender de “sus cercanos y lo que en su voluntad le puedan proveer”, por la conducta omisiva de las entidades condenadas en el proceso ordinario.*

*(...)*

*Por lo expuesto, esta Sala revocará el fallo proferido el 26 de abril de 2018 por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que a su vez confirmó la sentencia del 27 de febrero de 2018 de la Sala de Decisión de Tutelas No. 3 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia; para, en su lugar, amparar de manera transitoria los derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital y a una vida en condiciones dignas de María Esneda Herrera de Victoria. Ello, por cuanto, en la actualidad se presenta un perjuicio irremediable en cabeza de la demandante y sus condiciones no le permiten esperar a las resultas del litigio ordinario aun vigente, en pro del amparo de sus derechos a la seguridad social, al mínimo vital, a la dignidad humana, a la igualdad y a la vida en condiciones dignas.*

- (i) A COLPENSIONES que, en un término no superior a cinco (5) días contados desde la notificación de esta providencia, reconozca, liquide y pague la pensión de sobrevivientes a favor de María Esneda Herrera de Victoria y la incluya en nómina por las razones expuestas; y*
- (ii) A la empresa CARLOS SARMIENTO L & CIA INGENIO SAN CARLOS S.A., que, en un término no superior a treinta (30) días contados desde la notificación de esta providencia, realice el cálculo actuarial correspondiente a los aportes para efectos pensionales de María Esneda Herrera de Victoria, en calidad de cónyuge del causante fallecido, en consideración al periodo laborado por Donaldo Victoria (Q.P.D) para esa empresa entre el 10 de agosto de 1964 hasta el 24 de diciembre de 1971, teniendo como IBL el monto del salario que devengaba al momento de la ejecución de la relación laboral y traslade los respectivos aportes a COLPENSIONES; con la advertencia de que si vencido este periodo no se ha cumplido con esta orden, COLPENSIONES deberá iniciar el trámite de desacato de este fallo de tutela, sin perjuicio de la acción de cobro coactivo establecida en el artículo 24 de la Ley 100 de 1993.*

*Y si bien podría acotarse que se trata de un asunto aislado referido al deber de aprovisionamiento que gravita en determinados empleadores, que con anterioridad a la ley 100 de 1993 estaban obligados a asumir de manera total o*

parcial las pensiones de vejez mientras el sistema de seguridad social los subrogaba en ese riesgo, no es menos cierto que, las consecuencias de no afiliación en un periodo determinado se deben examinar en **cada asunto concreto**, bajo criterios de **razonabilidad y proporcionalidad**, de modo que no todos los casos de no afiliación al sistema ni cualquier omisión leve puede conllevar a la gravosa consecuencia de radicar en el empleador la responsabilidad de asumir íntegramente los riesgos de vejez, invalidez y muerte de sus trabajadores; previendo además, que la correspondiente interpretación debe no sólo amparar los derechos irrenunciables a la seguridad social del trabajador y de su núcleo familiar, sino velar que tampoco se afecte a los actores del sistema.

Es así como se encuentra pertinente al asunto concreto la reflexión que la Corte Constitucional hizo en la sentencia Sentencia **T-234/18** Referencia: Expediente T-6.549.771 con ponencia de la magistrada CRISTINA PARDO SCHLESINGER donde se precisan los alcances del incumplimiento de la obligación del empleador en la afiliación del trabajador, en varios de sus matices:

- 1.1. Al tratarse de obligaciones expresamente consagradas en la ley, no es posible que los empleadores se amparen en su propia culpa para evadir su cumplimiento y exonerarse de las consecuencias que puede acarrear su omisión.
- 1.2. **Por tanto, “si los empleadores no realizan los aportes a pensión respectivos, ya sea porque nunca afiliaron al trabajador, o de haberlo hecho, nunca pagó los aportes, no puede quedar desamparado el trabajador frente a su expectativa a obtener un derecho pensional”**<sup>69</sup>. Así, dicha omisión no puede ser imputada al trabajador, ni mucho menos este deberá soportar el peso de las consecuencias adversas de la conducta de su empleador, como la imposibilidad de acceder a una pensión<sup>70</sup> que garantice las condiciones mínimas de una subsistencia digna, pues se pondrían en riesgo derechos fundamentales como el mínimo vital, la dignidad humana y la seguridad social del empleado<sup>71</sup>.
- 1.3. **De lo anterior se extraen tres posibilidades que generan, además, diferentes responsabilidades:**
  - (i) **Si el empleador omitió realizar la afiliación de un empleado al sistema general de seguridad social en pensiones, y dicha omisión se extendió “por un periodo igual o superior al que la administradora general de pensiones en el régimen de prima media con prestación definida, es decir Colpensiones, requiere para el reconocimiento efectivo de una pensión de vejez en caso de haber sido afiliado a dicha entidad, le corresponderá al empleador negligente asumir el valor de dicha prestación periódica”** (Corte Constitucional, sentencia T-291 de 2017 MP Alejandro Linares Cantillo), lo anterior debido al fenómeno de la subrogación del riesgo, el cual permite trasladar la obligación de reconocer y pagar las prestaciones que se generen para amparar las contingencias de vejez, invalidez y muerte a un fondo o administrador de



pensiones, pero si no hay afiliación el riesgo no se desplaza, por lo tanto, la responsabilidad completa es del empleador.

(ii) **Si el empleador omitió afiliar a su trabajador a un fondo de pensiones, pero lo hace (afiliación) de manera tardía, la ley contempla la obligación que tiene el empleador de trasladar al sistema, el valor de los aportes correspondientes al tiempo laborado por el empleado y que no fue cotizado por el patrono.** Así, el fondo o administradora expide al empleador un cálculo actuarial de lo adeudado, correspondiente a los aportes que se debieron realizar desde el mismo momento en que inició la relación laboral<sup>4</sup>, este hace el correspondiente pago, trasladando la responsabilidad pensional a la entidad, la cual, si se cumplen los requisitos para una prestación económica deberá ser quien la asuma.

*(iii) Finalmente, si el empleador afilió cumplidamente al trabajador, pero no hizo los pagos de las cotizaciones que debía, se está frente a la figura del allanamiento a la mora por parte del fondo o administrador de pensiones, ya que a este el legislador le ha dado la oportunidad de a través de instrumentos legales, perseguir el pago de dichos aportes. De tal manera que las prestaciones económicas que se generen serán asumidas por el fondo o administradora con la posibilidad de acudir a los recursos judiciales o administrativos para lograr por parte del empleador moroso el pago de los aportes adeudados junto con los intereses a que haya lugar.*

**Específicamente, en el segundo caso que se presenta cuando el empleador afilia tardíamente a su empleado, como se dijo, debe solicitar al fondo o administradora de pensiones el cálculo actuarial (aportando los demás documentos que exija la entidad para el efecto) a partir del cual debe tomar la decisión de pagar dicho valor a la administradora y trasladar el riesgo o asumir las prestaciones económicas que puedan presentarse.**

**1.4. Es clara la intención del legislador al prever esta figura (pago del cálculo actuarial), y es la de permitirle al trabajador que el periodo que su empleador no hizo los aportes a un fondo porque no lo afilió, se contabilice dentro de su historial de semanas de cotización para todos los efectos prestacionales que**

---

<sup>4</sup> Esto, de acuerdo, inicialmente con lo previsto en el Decreto 1748 de 1995, artículo 57 "Por el cual se dictan normas para la emisión, cálculo, redención y demás condiciones de los bonos pensionales y se reglamentan los Decretos leyes 656, 1299 y 1314 de 1994, y los artículos 115, siguientes y concordantes de la Ley 100 de 1993", modificado por el artículo 17 del Decreto 3798 de 2003, en el que se reiteró la necesidad de solicitar y pagar la suma que arroje el cálculo actuarial correspondiente a las cotizaciones del trabajador no afiliado, con el fin de que puedan ser computadas para el reconocimiento y pago de una prestación pensional.

se hallen inmersos dentro del Sistema General de Pensiones. De tal manera que, si se hace la correspondiente afiliación del empleado por parte del empleador y se paga el valor del cálculo actuarial, a satisfacción de la entidad administradora de pensiones, los periodos pagados deben ser aplicados para la fecha en que se laboraron y debieron ser reportados.

En esta oportunidad la Corte constitucional se ocupó de una acción de tutela formulada por el señor José Daríel Vásquez Castaño, actuando en nombre propio, contra Colpensiones por considerar vulnerados sus derechos fundamentales de petición, al mínimo vital, a la vida en condiciones dignas, a la protección reforzada de las personas de la tercera edad y en condiciones de debilidad manifiesta y a la seguridad social, **al negarle la pensión de invalidez** a la que tiene derecho por cuanto (i) no ha hecho las correspondientes correcciones en su historia laboral y, por lo tanto, (ii) no cumple con el requisito de densidad de semanas para tal efecto.

Colpensiones negó la prestación porque si bien, “el periodo comprendido entre el 01/08/2011 y 30/11/2011 fue convalidado por el empleador ROGELIO ARBELAEZ S.A. (...) mediante Cálculo Actuarial conforme a la solicitud de corrección de la Historia Laboral interpuesta mediante radicado No. 2017\_9184323 del 31 de agosto de 2017, la fecha de estructuración establecida en el dictamen 5842014 del 11 de septiembre de 2014, fue el 5 de diciembre de 2012 por lo que el hecho generador de la Invalidez ocurrió con anterioridad a la fecha de realización del cálculo actuarial, razón por la cual NO podrá tenerse en cuenta para el estudio de la pensión de invalidez”. Y “excluyendo los tiempos validados mediante cálculo actuarial”, y concluyó que “el asegurado no acredita el requisito de las 50 semanas cotizadas dentro de los tres (3) años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, es decir desde el 05 de diciembre de 2009 al 05 de diciembre de 2012, en los cuales únicamente se acreditan 39 semanas, razón por la cual no es procedente el reconocimiento de la prestación solicitada”.

El argumento de la necesidad de que el cálculo actuarial se pague con anterioridad a la ocurrencia del hecho generador, es decir, la estructuración de la invalidez, se fundamentó en dos precedentes institucionales: a) Concepto No. 2007014853-001 del 19 de abril de 2007 emitido por la Superintendencia Financiera de Colombia y b) en el concepto jurídico No. 2015\_4957195 emitido por la Vicepresidencia jurídica y Secretaría General de Colpensiones el 2 de junio de 2015.

Precisa la Corte constitucional que, si durante el periodo en que el empleador omitió la afiliación al Sistema General de Pensiones de sus trabajadores, se sobreviene la muerte o la invalidez de cualquiera de ellos, la responsabilidad del reconocimiento y pago de la prestación respectiva está en su cabeza y no resulta válido su aseguramiento posterior. Sin embargo, no se descarta que a través de la figura de la conmutación pensional este empleador pueda trasladar sus

*obligaciones a una administradora del Sistema General de Pensiones, para lo cual el cálculo actuarial respectivo debe ser ajustado y considerar los factores necesarios para que el pago de las mesadas sea garantizado.*

*(...)*

*Tal como se expuso en precedencia, la finalidad del legislador al permitirle al trabajador que el período en que su empleador omitió su afiliación al Sistema General de Pensiones se contabilice dentro del mismo, a través del traslado de una reserva actuarial o de un título pensional, no es otro que estas semanas cuenten para todos los efectos, inclusive para las pensiones de invalidez o de sobrevivencia, sin perjuicio de la facultad de la administradora, de resultar procedente, de solicitar al empleador el recálculo por la suma que hubiera cubierto la póliza previsional en caso de haber estado afiliado todo el tiempo al Sistema General de Pensiones. Frente al tema, se reitera que en los casos en que estos siniestros ocurrieron y se conocieron durante el periodo de omisión sólo pueden trasladarse al Sistema a través de una conmutación pensional.*

*(...)*

*No obstante, advierte la Sala que el concepto de Colpensiones no se encuentra ajustado ni a la ley ni al concepto emitido por la Superintendencia Financiera ya que: (a) niega la procedencia de la liquidación y cobro de un cálculo actuarial de afiliación de empleador privado para el riesgo de invalidez; (b) en caso excepcional de tener en cuenta el cálculo pagado para riesgo de invalidez, lo permite si esta (invalidez) se generó después de la fecha de liquidación y cobro del cálculo. Estas dos conclusiones, - según la Corte- por una parte, vulneran los principios de universalidad, integralidad, unidad y eficiencia, que se encuentran vigentes desde la misma expedición de la Ley 100 de 1993 y que, además, están íntimamente ligados al artículo 48 de la Constitución Política de 1991 dado que el propósito del sistema general en pensiones era la integración y cubrimiento de las contingencias que pudieran acaecer a sus afiliados, sin distinción alguna. Por otra parte, está imponiendo una condición adicional que la ley no previó para el cálculo actuarial, esto es, que su correspondiente pago debe hacerse antes de la ocurrencia del riesgo.*

*Aunado a que la omisión de afiliación alegada por Colpensiones se dio en el periodo de agosto a noviembre de 2011 y no en diciembre de 2012 fecha en la que se estructuró la invalidez, de tal manera que, de acuerdo con lo señalado anteriormente, respecto de que no es posible contabilizar los periodos declarados cuando la invalidez se produzca durante el periodo en que no se estuvo afiliado dicha hipótesis no se advierte en este caso, ya que la invalidez se estructuró en una fecha posterior. Situación diferente es que el pago del cálculo actuarial se hizo de manera tardía pero ajustada a los requerimientos legales y administrativos. Lo anterior se verifica con el hecho de que **Colpensiones le emitió al empleador el***

**cálculo a pagar, aceptó el pago, incluyó los periodos en el reporte, y contabilizó dichas semanas para verificar el cumplimiento de los requisitos de la Ley 860 de 2003 frente a la pensión de invalidez.**

*De tal forma que, si Colpensiones ya aplicó el cálculo actuarial a los periodos declarados, es porque el empleador aportó los documentos pertinentes, y en consecuencia, cumplió los requerimientos de la entidad encontrando probado el vínculo laboral y la omisión por parte del empleador del pago de aportes a pensión, en tanto sí hizo los aportes a salud y parafiscales, lo cual advierte su buena fe 89.*

*Finalmente, considera la Sala que en el caso sub examine, existe una ruptura del principio de respeto al acto propio por parte de Colpensiones al actuar de manera incoherente y rompiendo el hilo de la seguridad jurídica (...) por cuanto en La Resolución SUB 273007 del 28 de noviembre de 2017 excluyó de manera intempestiva los **periodos agosto a noviembre de 2011 contabilizados anteriormente para acceder a la prestación solicitada.** (...) que redundó en una violación del derecho al debido proceso y la buena fe del actor. (...)*

*El argumento esbozado por la entidad para no contarlos, según la resolución SUB 273007 del 28 de noviembre de 2017, no resulta aplicable en el presente asunto dado que se activaría en el caso que la estructuración de la invalidez se hubiese dado durante el periodo en que se omitió la afiliación, lo cual no sucedió respecto del actor dado que su invalidez acaeció de manera posterior al tiempo laborado (sin afiliación) y cuya afiliación y pago sí se realizaron de manera posterior, lo cual genera una interpretación y aplicación del pago del cálculo actuarial que resulta gravosa para el actor en tanto la normativa no lo incluye como prerrogativa de dicha figura y vulnera los principios del sistema pensional, con lo cual se trasladan las consecuencias de una responsabilidad del empleador y del fondo, al afiliado que se traduce en la imposibilidad de acceder a una prestación económica que supla de manera suficiente sus necesidades básicas.*

*De acuerdo con el reporte emitido por Colpensiones, el actor, en los tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez cuenta con 386 días, correspondientes a 55.14 semanas de cotización. (incluidas las semanas validadas con el cálculo actuarial).*

*(...)*

*Así las cosas, el señor José Dariel Vásquez, tiene derecho a la pensión de invalidez solicitada como quiera que cumple los requisitos legales para el efecto, de tal suerte que Colpensiones, con la negativa reiterada de reconocimiento de la prestación solicitada, vulneró los derechos fundamentales al mínimo vital, a una vida en condiciones dignas y a la seguridad social del actor.*

*(...)*

*En consecuencia, esta Sala ordenará el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez a que tiene derecho el señor José Dariel Vásquez, habida cuenta que se acreditó una pérdida de capacidad laboral mayor al 50% y más de 50 semanas de cotización en los tres años anteriores a la pérdida de capacidad laboral (5 de diciembre de 2012). (...) se revocarán las decisiones de instancia que declararon improcedente el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, y en su lugar se concederá la acción de tutela, y (iii) se ordenará a Colpensiones que, dentro del término improrrogable de cinco (5) días contados a partir de la notificación de esta sentencia, emita acto administrativo que reconozca y ordene el pago de la pensión de invalidez al señor José Dariel Vásquez Castaño a partir del mes siguiente a la notificación de esta providencia, así como del retroactivo a que haya lugar hasta su inclusión efectiva en nómina de pensionados.*

Pues bien, aun cuando en el subjuice se ocupó esta sala de un asunto de pensión de sobrevivientes, es posible aplicar por analogía las consideraciones emanadas de la Corte Constitucional en los dos asuntos referenciados, por coincidir finalmente en la validación de semanas cuyas cotizaciones con mora fueron satisfechas con posterioridad a la ocurrencia del riesgo, en el mismo mes de deceso del asegurado a quien según la historia laboral de Colpensiones (Fl. 77) sólo le faltaba 6,85 semanas para completar el mínimo de 50 exigidas para dejar causada la prestación de sobrevivientes, lo que evidencia una afiliación tardía por parte de López Jiménez José Ramos último empleador quien en virtud de la misma satisfizo aportes en favor de su trabajador Jorge Iván Caro desde octubre de 2015 y lo hizo hasta su muerte, pudiéndose tener como válidamente sufragados por éste las cotizaciones causadas durante el primer periodo servido por el referido trabajador comprendido en los **ciclos 2015/07 a 2015/09** sin afiliación a la seguridad social, equivalentes a 12.85 semanas que adicionadas a las 43.15 registradas en la historia laboral, le permiten alcanzar en los tres últimos anteriores al deceso la densidad de 56 semanas en pensión superando las exigidas en el numeral 2 art. 46 de la Ley 100 de 1993 modificado por el art. 12 de la Ley 797 de 2003.

No se trata aquí de apartarse del criterio de la Corte Suprema en la materia, sino de la aplicación racional y proporcional de las disposiciones legales que rigen cuando se presentan omisiones de afiliación de algunos periodos de labor, de modo que no se afecte de manera radical y supremamente gravosa a un empleador que venía cumpliendo sus obligaciones en la mayor parte del tiempo servido por el trabajador y sólo de manera aislada por una labor de corto lapso se

abstuvo de afiliarlo a la seguridad social, coincidiendo en que por falta de esas poquísimas semanas no alcanzara a reunir la densidad mínima exigida en la ley, pero que subsanó con el correspondiente pago de las semanas insolutas con sus intereses, cuya efectividad no desaparece por el hecho de haberse sufragado con posterioridad al deceso del asegurado, máxime cuando la entidad aseguradora recibió y registró en la historia laboral los aportes y el periodo de validación no corresponde a la época de ocurrencia del deceso, punto específico sobre el que enfatizó la corte Constitucional en la última de la providencias en cita.

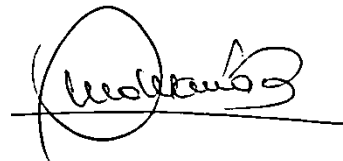
De esta manera no solo se garantiza que los sobrevivientes del asegurado puedan acceder a la prestación derivada de la muerte del cónyuge, sino que tampoco se afecta el sistema de seguridad social, pues no se trató de un afiliado eventual sino de una persona que reunía en toda su vida laboral 499,57 semanas en pensión, lográndose un equilibrio en la resolución de este conflicto, pues como predica la misma Corte Constitucional “el principio de proporcionalidad busca que la medida no sólo tenga fundamento legal, sino que sea aplicada de tal manera que los intereses jurídicos de otras personas o grupos no se vean afectados, o que ello suceda en grado mínimo.” El principio de proporcionalidad surge como una técnica para evaluar la constitucionalidad de las decisiones de los poderes del Estado, especialmente las del legislador, para que no abuse de su poder, de ahí la necesidad de modular la interpretación sobre el tema de responsabilidad del empleador que por un corto lapso omitió afiliar al trabajador a la seguridad social.

Atendiendo a estos razonamientos, compartimos la referida ponencia.

Las Magistradas,



MARIA PATRICIA YEPES GARCIA



ANA MARIA ZAPATA PÉREZ